

Imprimir

Doloroso y repudiable el atentado del que fue víctima el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La violencia, tan propia de nuestra historia; tan de codo con nuestro devenir político; se ensaña otra vez desde sus oscuros laberintos y sus anónimos protagonistas. Enemigos agazapados de la paz, se les llamaba en otros tiempos. Pero no menos doloroso y repudiable es saber que el responsable material del atentado haya sido un niño de apenas de catorce años de edad. Uno más de entre los tantos a los que logra reclutar el crimen, aprovechando su pobreza, su orfandad y el mundo de exclusión y sin futuro al que un país y una sociedad infame e indolente los sigue condenando. Tan tristes eran las imágenes del candidato cubriéndose en su sangre, como la del niño tirado en el piso con la bota de un policía aprisionándole su pierna herida, un civil pisando su cabeza y varias armas apuntándole, frente a una horda de no se sabe quiénes que lo agredían e interrogaban en el lugar de su captura, cual si fueran los encargados de la aplicación de la justicia.

El niño, según los informes de prensa, es huérfano de una madre que murió con apenas 23 años. Su padre está en Europa adonde, dicen, viajó para vincularse como soldado en la guerra de Ucrania; se fue a seguir en la batalla para labrarse una vida que no pudo ser en su propio suelo; se fue dejando a su hijo, a quien a lo sumo pensaba también asegurarle un destino desempeñándose como mercenario de un conflicto del que, a no ser por la necesidad de sobrevivir, a los dos les es ajeno.

El escenario no puede ser otro que el de esa Colombia en la que Estado, gobiernos, dirigencias y partidos han sido incapaces de ofrecerles un destino diferente a los niños y jóvenes, a quienes les ha tocado desenvolverse en un contexto en el que se transcurre más cerca de la prisión o de la muerte que de la posibilidad de realizar sus vidas.

Todo este panorama nos tiene que llevar a decir -aunque a muchos les cueste- que ese niño, por la sola razón de ser niño, no es más que un inocente, “el inocente que no pudo serlo”, como diría el poeta Gonzalo Arango en su célebre texto “Elegía a Desquite”. Al menos no es más culpable que la sociedad que lo produjo, en la que se hizo más fácil aprender a manejar un arma o ingresar y permanecer en una banda delincriminal que a un colegio o una

universidad.

Sin que se le quiera eximir de responsabilidades, antes que un agresor, el niño también es una víctima, forjada en el abandono, en el entorno de un mundo sin afectos, carente de oportunidades y en un ambiente en donde los valores se trivializan y cualquier alternativa es válida para enfrentar ese plano cruzado de circunstancias al que lleva la pobreza. “Lo hice por plata para ayudar a mi familia”, fue lo primero que dijo al momento de su captura.

Ahora irá a prisión, bueno, no a prisión, se supone, sino a un centro de protección bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), al que, valga decir, se le hizo tarde para protegerlo. Para él será una cárcel, pues allí pasará unos años en contra de su voluntad, lejos de lo poco que quedaba de su familia y sobre todo de una libertad que le fue mezquina y lo único que le permitió fue terminar tendido en una calle herido por su osadía y bajo la amenaza de unas armas que, como la que él empuñaba, hacía tiempo ya lo habían hecho prisionero.

Sobran razones para rechazar el atentado y expresar manifestaciones de solidaridad con el senador Uribe, a lo que se han unido medios de comunicación, autoridades, gremios empresariales, políticos de diferente origen, redes sociales, etc.; pero esas manifestaciones de rechazo y solidaridad no están completas si no se hacen igualmente por este niño a quien, sin mayor reflexión, sencillamente se condena.

Nadie, o muy pocos y sin mayor eco, se ha ocupado de preguntar por el futuro de ese niño cuyas lesiones de existencia no serán menores que las de quien fue blanco de su ataque. No convocará a una marcha en su nombre esa sociedad para la que ahora simplemente es un sicario; no habrá discursos ni velas encendidas por ese niño muerto en vida; nadie se está preguntando por su abuela y demás familiares para quienes estos momentos no deber ser menos dolorosos. Nadie parece recordar que éste no es el primero -y tampoco será el último- de los niños y jóvenes que debido a los entornos en que viven y a la precariedad de sus condiciones son fácilmente instrumentalizados por los grupos criminales.

Por el contrario, en los medios de comunicación se le expuso sin prudencia y se violaron los protocolos que están obligados a cumplir cuando de los niños se trata; como es frecuente, el sensacionalismo, el morbo y la indolencia se sobreponen a la ética periodística. Y la mala tarea de algunos medios se sumó el oportunismo, la irresponsabilidad -también la indolencia- y falta de principios de algunos (as) candidatos (as) que convirtieron la entrada de la Clínica Santafé en una tarima de campaña.

Si por toda esta fauna fuera, ya el crimen, los móviles y los autores intelectuales están plenamente identificados, pese a que las entidades autorizadas de la investigación, aparte de la captura en flagrancia del niño, apenas han dado unos pasos en la identificación de uno o dos más de los responsables materiales, que es hasta donde en Colombia normalmente se llega.

Mientras tanto, los llamados a una mayor punitivización de la justicia para los menores de edad se han puesto a la orden del día, incluida la pena de muerte. Lo cierto es que, si en eso es que se insiste, seguirán pendientes las verdaderas soluciones; ni la cárcel, ni el aumento de penas serán la solución o la manera de prevenir este tipo de hechos para quienes, aparte de sus carencias materiales, han crecido entre las falencias de una cultura sin referentes de legalidad, mucho menos de ética, y en la que han sido testigos de que actuar por fuera de la ley y de los marcos institucionales es la estrategia más pronta para sobrevivir, lucrarse, tener poder o sentirse representado.

Contra Miguel Uribe atentaron quienes se resisten a pensar, y a permitir pensar, que otra sociedad, otras formas de vida y otras maneras de ver e imaginar el país son posibles; los mismos que insisten en naturalizar que los colombianos estamos condenados a vivir el sino trágico de la violencia y a continuar bajo la salvaguarda de una dirigencia, tan adulta como renegada, que no se deja de considerar suprema e irremplazable.

*Orlando Ortiz Medina*, Economista-Magister en estudios políticos

Foto tomada de: BBC